



¡Detengamos la represión de los defensores de derechos y de las organizaciones de pueblos del gobierno de Duterte!

Declaración de IBON International
12 de marzo de 2018

IBON International se ha unido a varias organizaciones filipinas e internacionales para denunciar las acusaciones de “terrorismo” que ha emitido el gobierno de Duterte refiriéndose a varios individuos de nacionalidad filipina defensores de derechos y miembros de organizaciones de pueblos y de la sociedad civil.

Como parte de su estrategia para proclamar al Partido Comunista de Filipinas (Communist Party of the Philippines, CPP) y al Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army, NPA) “organizaciones terroristas”, el Departamento de Justicia de Filipinas (Department of Justice, DOJ) presentó en un tribunal de Manila una petición que clasifica como “terroristas” a más de 600 individuos. Este evento sucedió meses después de que el gobierno rompiera unilateralmente el proceso de paz con el Frente Democrático Nacional (National Democratic Front, NDF).

Entre estas personas falsamente acusadas se encuentra Beverly Longid, miembro del Consejo Directivo de IBON International, copresidenta de la Alianza de las OSC para la Eficacia del Desarrollo y coordinadora global del Movimiento Internacional de los Pueblos Indígenas por la Liberación y la Autodeterminación (International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation, IPMSDL). Esta “extraña mezcla” de nombres, que un abogado especialista en derechos humanos calificó como una “violenta caza de brujas”, incluye a defensores de los derechos humanos, oficiales filipinos de las Naciones Unidas y cientos de alias, entre otros.

Firme defensora de los derechos de los pueblos indígenas, Beverly forma también parte de SANDUGO, un movimiento filipino de minorías nacionales en defensa de la autodeterminación. Es también la coordinadora de la Red de Pueblos Indígenas de Asia para la Energía y las Industrias Extractivas (Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy, AIPNEE). Ha participado en sesiones de la Organización de Naciones y Pueblos No Representados (Unrepresented Nations and Peoples Organization, UNPO), así como en varios procesos de las Naciones Unidas como el Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y en la agenda para el desarrollo sostenible pos-2015. La presencia de Beverly en el Consejo de IBON International es un recordatorio de que nuestro trabajo debe defender el derecho a la autodeterminación de la misma manera que cualquier otro derecho social, económico o cultural.

Estas acusaciones, tanto contra ella como contra otros activistas, no buscan sino desacreditar su trabajo crucial de defensa de los derechos de los pueblos y en pro de un desarrollo auténtico. Son el último blanco de los ataques constantes del gobierno a los defensores de derechos y, en general, a toda crítica real o percibida de sus prácticas cada vez más totalitarias.

Esta lista justifica que el famoso aparato de seguridad del gobierno acalle las voces de estos defensores y trabajadores en el desarrollo. Por aparato de seguridad entendemos a las fuerzas de policía, estrechamente implicadas en la mortífera “guerra contra las drogas”, así como a las fuerzas militares y

paramilitares, quienes han estado implicadas en los asesinatos extrajudiciales de los líderes de las comunidades indígenas, e incluso en recientes casos de tortura.[i] En resumen, dos fuerzas que se dedican a extender el terrorismo de Estado en el país.

Las acusaciones se basan en la Ley filipina de Seguridad Humana, una ley que desde su aprobación ha sido tachada de peligrosa tanto por las organizaciones internacionales de defensa de derechos como los movimientos sociales filipinos. Incluso el actual —y leal— portavoz del gobierno, Harry Roque, advirtió en 2007 de los riesgos que presentaba la ley debido a su vaga definición del “terrorismo”. [ii]

Esta falsa lista de “terroristas” se inscribe en un contexto de alarmantes violaciones de los derechos civiles y políticos en el país, como la reciente aprobación por parte de Duterte de una ley (RA 10973) que autoriza a la policía a convocar a individuos para que proporcionen testimonios y documentos.

El gobierno actual ya posee cierta notoriedad entre la comunidad internacional por su “guerra contra las drogas” en detrimento de las clases más pobres. ¿Acaso teme el gobierno de Duterte que los activistas expongan aún más su incumplimiento de los derechos de las comunidades pobres y marginadas, tanto en las ciudades como en el campo? ¿Es consciente el gobierno de que los trabajadores del desarrollo y de la sociedad civil denunciarán el aumento de la pobreza causado por la obediencia ciega del estado a las rebatidas políticas neoliberales?

IBON International desea expresar su solidaridad con los defensores de los derechos acusados falsamente de “terrorismo”. Apelamos a los filipinos y a la comunidad internacional para que vigilen de más cerca que nunca las artimañas del gobierno para reprimir la voz del pueblo.

Apelamos a nuestros amigos y aliados para que alcen la voz contra estas peligrosas e infundadas acusaciones y los riesgos que conlleva la reducción del espacio para la sociedad civil en el país.

Exigimos firmemente que el gobierno de Duterte y el DOJ frenen esta injusticia contra los activistas basada en la polémica Ley de Seguridad Humana. Exigimos que el gobierno detenga su actual “guerra contra las drogas”, los asesinatos de granjeros y de pueblos indígenas y su política económica contraria al desarrollo, pues únicamente expolian a las comunidades pobres y marginadas y representan injusticias de cara a los derechos de los filipinos.

**¡El activismo no es terrorismo! ¡Detengamos la criminalización de los defensores de derechos!
¡Plantemos cara a la tiranía!**

[i] IBON International and International Coalition for Human Rights in the Philippines. 2018. *Duterte Killings Continue: State Terror and Human Rights in the Philippines*.
<http://www.iboninternational.org/resources/17/12/01/duterte-killings-continue-state-terror-and-human-rights-philippines> (en inglés)

[ii] JURIST. 2007. “The Philippines Human Security Act violates international law.”
<http://www.jurist.org/hotline/2007/10/philippines-human-security-act-violates.php> (en inglés)